

Eje 4 Representaciones, discursos y significaciones

Título de la ponencia: El quiebre del consenso neoliberal: las estrategias discursivas de *La Nación* en la crisis de diciembre de 2001.

Nombre y Apellido: Lic. Carlos Luis Freytes Frey

E-mail: carfreytes@yahoo.com.ar

Pertenencia Institucional: Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.

1. Introducción

Más allá de ser un emergente de procesos de mediano y largo plazo, la crisis argentina de diciembre de 2001 se inscribió en la escena mediática local como un acontecimiento. La ruptura del régimen de convertibilidad; la renuncia anticipada del presidente De la Rúa; y, fundamentalmente, las masivas movilizaciones del 19 y 20 de diciembre, con su saldo de muertes y represión, establecieron un punto de inflexión en la esfera de la comunicación política. Más importante para el objetivo de analizar los discursos políticos, la regla de la Convertibilidad había devenido en el soporte simbólico último de las políticas neoliberales implementadas en la Argentina durante la década de los '90. En la medida en que el agotamiento de la norma cambiaria había dejado a esas políticas huérfanas de ese soporte, lo que nos proponemos analizar en este artículo es cuáles fueron las estrategias discursivas y las apuestas simbólicas de los articuladores del consenso neoliberal en la defensa de la continuidad de un paradigma de política crecientemente impugnado tanto por los actores del sistema político como por el curso de los hechos.

En este sentido, nos proponemos analizar algunos aspectos del funcionamiento de la esfera de la comunicación en los meses posteriores a diciembre de 2001. La comunicación política alude a esa esfera específica de la comunicación mediática en la cual se intercambian los discursos de los actores que tienen o pretenden legitimidad para expresarse públicamente sobre la política (Wolton, 1.995), y cuya apuesta es el dominio de la interpretación política de la coyuntura. Lo que caracteriza el funcionamiento de la esfera de la comunicación política es la disputa por imponer la interpretación del proceso social y político, disputa cuyo horizonte es incidir en la resolución de ese proceso incidiendo en la percepción que los actores sociales tienen de él.

El funcionamiento de la comunicación política viene dado por las modalidades autorreferenciales y de clausura semiótica que caracterizan la comunicación mediática, en función de las cuales determinados esquemas de sentido –cuya estabilización es el resultado transitorio de la resolución del proceso de lucha simbólica que se verificó en esa esfera en un momento previo de su funcionamiento- pasan a informar la aprehensión del proceso político en la producción cotidiana de noticias e informaciones. Ahora bien: hemos señalado que la crisis de 2001 comportó un acontecimiento en la esfera mediatizada de la comunicación política. Este carácter de acontecimiento puede ser comprendido en relación al carácter autorreferencial de la comunicación que allí se verifica: en este sentido, un acontecimiento supone la insuficiencia de las estructuras sedimentadas de sentido para dar cuenta de él, y en esa medida, inaugura un proceso de producción simbólica, que en el desplazamiento y la rearticulación de los esquemas estabilizados en un momento previo del funcionamiento del campo, procura producir la inteligibilidad de la novedad que dicho acontecimiento comporta, reinscribiéndola dentro de los esquemas propios de una posición particular al interior de un campo de lucha simbólica.

El objeto de este análisis son entonces las estrategias discursivas del diario *La Nación* para dar cuenta de la crisis de diciembre de 2001. La elección del diario se justifica por la posición central que ocupa dentro del campo periodístico, y como uno de los articuladores privilegiados del consenso neoliberal que acompañó la implementación de ese paradigma de política durante la década de los '90. A lo largo de 2001, la intervención del diario en el proceso de la comunicación política se había caracterizado por un proceso de rearticulación defensiva del consenso neoliberal contra la creciente impugnación de esas políticas por parte de los actores del sistema político¹.

Los recursos simbólicos movilizados por el medio en defensa del modelo económico fueron, por un lado, la defensa de la *estabilidad*. Por otro lado, el medio aplicó una estrategia de impugnación de los actores del campo político, que comportaba una interpretación restrictiva de la *crisis de representación*. Cómo puede observarse en el proceso de sanción de la Ley de Déficit Cero, los articuladores del consenso neoliberal² interpretaron la resistencia de los actores del sistema político a sancionar los ajustes necesarios para el sostenimiento de la regla cambiaria en términos de una

¹ Hemos analizado este proceso en: “Intelectuales y comunicación política: las rearticulaciones defensivas del consenso neoliberal en el ocaso de la Convertibilidad”, en VI Jornadas Nacionales de Sociología: ¿Para qué la sociología en la Argentina actual?, Carrera de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales – U.B.A., ISBN: 950-29-0816-3, 2005.

defensa de privilegios corporativos. En este sentido, *La Nación* movilizó contra los actores del sistema político el tópico de la *demanda de transparencia*: unos actores cuya pretensión de representar las demandas de la ciudadanía era de hecho refutada por sus prácticas particularistas³ resistían el ajuste fiscal por la voluntad de preservar espacios de apropiación ilegal de beneficios económicos –beneficios aludidos en la discusión pública bajo el tópico de la *corrupción*.

2. Los actores del campo político y la interpretación de la crisis

Como hemos señalado en la introducción, el acontecimiento que vino a redefinir las coordenadas de la comunicación política fueron las masivas movilizaciones en las calles que precipitaron la renuncia de De la Rúa, y que devinieron un elemento permanente del escenario político de los primeros meses de 2.002. Esta visibilidad y presencia constante de la protesta social introdujo un elemento novedoso en la tematización de la coyuntura. No obstante, uno de los clivajes privilegiados que continuó organizando el proceso de disputa simbólica fue el que enfrentaba a los actores del sistema político –constituido en un actor homogéneo bajo la denominación de *clase política*- con los articuladores del consenso neoliberal, puestos ahora, frente al estallido de la Convertibilidad, en una posición defensiva.

La interpretación de la crisis contra la que *La Nación* polemizaba durante el período analizado era, esencialmente, la propuesta por el presidente electo por la Asamblea Legislativa, Eduardo Duhalde. Algunos autores han analizado el proceso de producción de los recursos simbólicos que contribuyeron a sancionar la implementación de las políticas neoliberales por el gobierno de Menem durante la década de los '90 en términos de un vaciamiento del campo político (Canelo, 2002). Brevemente, esta operación habría consistido en el borramiento del adversario social, y en la presentación de las políticas neoliberales como una política universalista, en la cual se expresaba un interés general –del conjunto de la Nación- contra la fragmentación y el carácter particularistas de los intereses que se expresaban en la esfera política. Esta política

² Entre los cuales jugaron un papel decisivo los economistas expertos, cuyas tomas de posición, coincidentes con las de *La Nación*, se legitimaron en referencia a una racionalidad estrictamente técnica.

³ Y, luego de las elecciones legislativas de 2.001, por el rechazo de la ciudadanía expresado en el caudal de votos en blanco y nulos. Ese voto, objeto también de una interpretación restrictiva por parte de *La Nación*, fueron traducido exclusivamente en términos de una demanda de transparencia compatible con el ajuste fiscal –bajo los tópicos de la *reforma del Estado* y la *reforma política*-, y en esta medida, desvinculado de las consecuencias de la política económica en términos de recesión, desempleo y exclusión crecientes. Hemos analizado este punto en “Espacio público, medios de comunicación y política: representaciones sobre el voto bronca en las elecciones legislativas de 2001”, *Semióticas de la vida cotidiana*, Oscar Steimberg y Graciana Vázquez Villanueva eds., A.A.S. e Instituto de Lingüística – U.B.A., Buenos Aires, 2003, ISBN. 950-29-0766-3.

universal se pretendía entonces orientada no contra un actor social definido, sino contra un estado de cosas *-la decadencia, los años de fracasos, la crisis*. Contra este vaciamiento, el discurso de Duhalde al asumir ante la Asamblea Legislativa -que adjudicaba la crisis al modelo de la Convertibilidad como tal- restituía a la vez un adversario social, el sector financiero; y convocaba a una redefinición de las alianzas sociales del gobierno, en la cuál el interés de la Nación coincidía con los sectores de la producción y del trabajo:

“Mi compromiso a partir de hoy, es terminar con un modelo agotado que ha sumido en la desesperación a la enorme mayoría de nuestro pueblo para sentar las bases de un nuevo modelo capaz de recuperar la producción, el trabajo de los argentinos, su mercado interno y promover una más justa distribución de la riqueza. (...)”

La Argentina está quebrada. La Argentina está fundida. Este modelo en su agonía arrasó con todo. La propia esencia de este modelo perverso terminó con la convertibilidad, arrojó a la indigencia a 2 millones de compatriotas, destruyó a la clase media argentina, quebró a nuestras industrias, pulverizó el trabajo de los argentinos”. (Discurso del presidente Duhalde ante la Asamblea legislativa – 01-01-2002)

“Sentar las bases de un modelo nuevo económico, social, cultural, significa romper definitivamente con el pensamiento único que ha sostenido y sostiene que no hay alternativa posible al modelo vigente. (...) ¿Cuál es uno de los rasgos comunes que tienen todos los modelos exitosos? Es la defensa irrestricta de los intereses permanentes nacionales”. (Discurso del presidente Duhalde ante la Asamblea legislativa – 01-01-2002)

En el relato de Duhalde, la crisis, con su correlato de recesión, desempleo y exclusión social era una consecuencia *intrínseca* al modelo económico de la Convertibilidad, de modo que su superación exigía una transformación de dicho modelo, y en consecuencia, la reformulación de las alianzas sociales y políticas que sustentaban la acción de gobierno.

“Vengo a decirles que debemos terminar décadas en la Argentina de una alianza que perjudicó al país, que es la alianza del poder político con el poder financiero y no con el productivo. El poder financiero, las finanzas, son imprescindibles para un país -imprescindibles- pero ubicadas en el lugar que corresponden. Por eso vengo a decirles que esa alianza es la que tenemos que terminar a partir de hoy en la Argentina; (...) sepan que Argentina decide construir una nueva alianza, que es la alianza que yo denomino, pero podemos denominarla de cualquier manera, la alianza de la

comunidad productiva". (Palabras del presidente Duhalde ante empresarios reunidos en la residencia de Olivos, 04-01-2002)

"La alianza que gobernó en las últimas décadas tuvo que ver con una alianza del sector político con el sector financiero, con el sector bancario, que fue dejando de lado lenta pero progresivamente aislado y abandonado al sector de la producción argentina. (...) Estamos construyendo una nueva alianza con los que trabajan y producen en la Argentina, sean empresas argentinas o no argentinas, los que producen, los que dan trabajo, y por supuesto que hay sectores que no están conformes con este cambio, con este viraje de la alianza que hemos construido, y por supuesto que van a tratar de desestabilizarnos". (Discurso del presidente Duhalde al recibir a las ONGs en Olivos, 10-01-2002)

Contra esta interpretación, *La Nación* desplegó un doble proceso de impugnación, que en la definición de las causas del quiebre de convertibilidad impugnaba a la vez tanto la interpretación propuesta por los actores del campo político cuanto la legitimidad de esos actores. En efecto, el estallido de la Convertibilidad no era una consecuencia ineluctable de un paradigma de política, sino que su causa última se encontraban en la incapacidad de los actores del sistema político para ajustar el gasto público a las exigencias de la regla cambiaria. Replicando lo que había sido la estrategia discursiva del diario a lo largo de 2001, esta incapacidad se vinculaba a un manejo corrupto y particularista de la cosa pública, y en tanto tal, se vinculaba con la demanda de transparencia y de reforma del Estado y las instituciones del sistema político. Entre una extensísima lista de ejemplos⁴, reproducimos algunos de los editoriales de *La Nación* que desarrollan esta línea argumentativa de manera concluyente⁵:

"No se han anunciado ahora reformas profundas que apunten a una mayor eficiencia del Estado y a una reducción genuina, sostenible y significativa del gasto público. (...) La ausencia de estas reformas ahora, así como lo fue en la década anterior, llevó al Estado argentino al default y a generar una crisis de confianza que terminó afectando tanto la inversión como el consumo, la producción y el empleo y que finalmente motivó la fuga de los depósitos bancarios. La crisis

⁴ Ver por ejemplo en este sentido "El nuevo plan económico", Editorial de *La Nación* del domingo 6/01/2002; y "Restricciones sobre los depósitos", Editorial de *La Nación* del martes 15 de Enero de 2002.

⁵ En este punto, y al igual que ocurrió a lo largo de 2001, la posición de *La Nación* coincidía con las de los economistas ortodoxos, cuyas voces fueran puestas en circulación por el diario en una estrategias que tendía a ratificar sus propias posiciones con una legitimidad exterior a la del campo periodístico, aquella proporcionada por el saber experto del que estos economistas eran portadores. Entre una también extensa lista de ejemplos: "Si bien la crisis económica ha desembocado en un serio problema del sistema financiero y monetario, el origen de ese problema tiene raíces claramente fiscales. El desaforado aumento del gasto público y la errante política tributaria son algunos de los factores que destruyeron la convertibilidad. (...) Pero al mismo tiempo, los problemas fiscales se originan en la existencia de una dirigencia política que, en su mayoría, cree que la escasez es un invento de los economistas. (...) ¿Por qué hoy se habla de abandonar la convertibilidad? Por la razón de que ya no pueden seguir gastando alegremente gracias al endeudamiento. A partir del momento en que la Argentina se quedó sin crédito, la convertibilidad pasó a ser el enemigo de los políticos gastadores". ("La convertibilidad, agotada por el déficit fiscal y el endeudamiento", columna de Roberto H. Cachanosky, *La Nación*, Miércoles 02 de enero 2002, Página 03, Suplemento Economía)

originada en el sector público se extendió así a todo el conjunto económico y social. Sin embargo, no ha sido ésa la interpretación de una parte importante de la dirigencia política que incluye al actual Presidente y a quienes lo han apoyado, incluso desde la oposición. La adjudicación de los males al llamado modelo neoliberal y no a las inconsistencias en su aplicación constituye un error de diagnóstico del mismo tenor que suponer que la convertibilidad es intrínseca a ese modelo y que, por lo tanto, también es un mal por erradicar". ("El nuevo plan económico", Editorial de *La Nación*, Domingo 6 de enero de 2.002)

"El desastre que paraliza la economía y destruye los ingresos y ahorros de todos los argentinos tiene como razón esencial el desborde mayúsculo del gasto estatal. (...) Quedó así configurada una gravísima crisis de financiamiento del sector público porque los responsables de administrar el Estado no tomaron a su cargo la responsabilidad de suprimir el sobregasto (...).

El desprestigio cada vez más profundo de la llamada clase política proviene, básicamente, de la convicción colectiva de que es el elenco responsable de un tipo de administración que sobreendeudó al sector público para financiar situaciones y proyectos partidarios o personales mientras las sospechas sobre un grado alto de corrupción entre sus actores encontraban cada vez mayor campo para crecer en la opinión pública.

El descrédito de la clase política tiene fundamento. En la Argentina no ha fallado un sistema o un "modelo" económico-financiero. Han fallado las conductas políticas que no han atendido otra lógica que la de los intereses más bajos antes que el bien común. Y cuando ésa es la falla, no hay sistema o "modelo" capaz de dar resultado". (Editorial de *La Nación*, Domingo 20 de enero de 2.002)

La impugnación de los actores del campo político ensayada por *La Nación* implicaba adjudicar las causas de ruptura de la Convertibilidad, y de la crisis económica, a la incapacidad o la negativa de dichos actores a recortar los gastos del Estado. En la medida en que esa resistencia era explicaba por la voluntad de preservar espacios de apropiación de beneficios particularistas –esto es, por la corrupción de los elencos políticos-, *La Nación* podía movilizar a favor de esta impugnación el elemento novedoso que los hechos del 19 y 20 de diciembre habían introducido en la escena política: la movilización de la sociedad civil en las calles.

Digamos en este punto que el sentido de esa movilización era en si mismo un objeto de disputa al interior del campo de la comunicación política. En efecto,

despojada de liderazgo reconocibles⁶; protagonizada por sectores sociales heterogéneos, y, en los meses que siguieron a diciembre, portadores de demandas diversas y a veces contradictorias, el proceso de movilización iniciado el 19 y 20 no se desactivó con la renuncia del ministro Cavallo y el presidente De la Rúa, sino que continuó siendo un elemento permanente de la escena política en los meses siguientes. Adicionalmente, la consigna acuñada en las movilizaciones que se sucedieron en la ciudad de Buenos Aires: “que se vayan todos”, contribuyó, por su propio carácter impracticable⁷, a alimentar un proceso de lucha simbólica en el cual diversos enunciadores pugnaron por dotarla de un contenido preciso y traducible en decisiones efectivas del sistema político –a la vez que el carácter indeterminado de la consigna le dio a ese proceso un carácter abierto y permanentemente renovado.

En relación al carácter indeterminado de la movilización social, una de las estrategias discursiva de *La Nación* consistió en dotarla de un sentido preciso, que le permitiera movilizar la protesta social a favor de las posiciones sostenida por el diario, y detrás de la impugnación de los actores del sistema político. En este sentido, para *La Nación* las demostraciones que precipitaron la renuncia de De la Rúa –y las que se sucedieron durante enero y febrero- tenían un sentido inequívoco: expresaban el hartazgo de la ciudadanía respecto de las modalidades particularistas de manejo de la cosa pública –las mismas que, de acuerdo con el diario, estaban en el origen de la crisis económica-; y, en tanto tales, su atención requería por parte de la clase política la implementación de una *reforma política y del Estado* –reformas que, por otro lado, eran consistente con las medidas económicas que, contra la anticipada resistencia de los actores del campo político, eran, desde la perspectiva de los economistas ortodoxos y los organismos multilaterales de crédito, cuyas posiciones *La Nación* suscribía, las requeridas para comenzar a superar la debacle económica: reducción del gasto público; disciplina fiscal, y austeridad monetaria-⁸:

⁶ Las crónicas periodísticas del período señalaron el papel que habrían desempeñado las estructuras del justicialismo bonaerense en la promoción de las movilizaciones en demanda de alimentos de los sectores empobrecidos y excluidos del conurbano. En la medida en que estas movilizaciones desembocaron en saqueos a comercios y supermercados, contribuyeron a configurar el clima de caos social que aceleró la renuncia de De la Rúa, y en esa medida, fueron funcionales al objetivo del P.J. de desplazar al gobierno radical. Sin embargo, la dinámica de la movilización pronto desbordó los objetivos políticos de sus presuntos promotores. En la práctica, la desmovilización de la sociedad civil fue una preocupación permanente del gobierno de Duhalde. Finalmente, el asesinato de dos jóvenes piqueteros en el Puente Pueyrredón por efectivos de la Policía bonaerense terminaron por imponerle al gobierno la decisión de adelantar la convocatoria a elecciones presidenciales.

⁷ En su columna política dominical del 24 de marzo de 2002, Mariano Grondona reflexionaba con preocupación sobre la consigna “que se vayan todos” aludiendo al análisis de Sorel sobre el papel del mito en la política. Como recuerdan los análisis de Laclau sobre el lugar que ocupa la “huelga revolucionaria” en el pensamiento de Sorel, la eficacia de la consigna no reside en su contenido efectivo, sino en su dimensión mítica, esto es, en la capacidad, por su propio carácter irrealizable, de mantener y reproducir la identidad de un sujeto político revolucionario. En el caso argentino, la consigna “que se vayan todos” habría cumplido un papel similar: evitando la reducción de la movilización social a un contenido realizable, habría permitido la reproducción de un sujeto político distanciado y desanclado de los dispositivos institucionales del sistema político.

⁸ En el mismo sentido, ver: “Reconstruir el tejido social”, Editorial de *La Nación*, domingo 30 de Diciembre de 2001

“Para el buen cumplimiento de la tarea que desde estas columnas le estamos reclamando a la dirigencia política será fundamental que el actual presidente de la República y el Congreso de la Nación sepan interpretar los reclamos de la ciudadanía independiente, que se pusieron tan claramente de manifiesto en los últimos meses. No debe desatenderse, por ejemplo, la muy clara señal que ese sector envió cuando en las elecciones del 14 de octubre optó masivamente por el voto en blanco, por el voto anulado o lisa y llanamente por la abstención. El clamor de esos electores -que en conjunto llegaron a alrededor del 40% del padrón- no admite interpretaciones equívocas: lo que se exige es la eliminación de los focos de corrupción y los vicios que han convertido la actividad política en una dolorosa y pesada carga para la Nación. Lo que se pide es la drástica disminución de los altísimos costos de la política y la entronización de una nueva manera de concebir el manejo de los asuntos públicos, que debe dejar de ser un abusivo recurso para la creación de privilegios y nichos parasitarios y debe convertirse en un genuino acto de servicio inspirado por la búsqueda del bien común. (“Ahora, definir el rumbo”, Editorial La Nación, miércoles 26 de Diciembre de 2001)

“La dirigencia política debería comprender que, detrás de los llamados cacerolazos hay un mensaje que va mucho más allá de una simple demanda vinculada con la severa crisis financiera. Deberían entender que aquéllos son el correlato de una crisis de representación política, a la cual buena parte de los propios dirigentes partidarios ha contribuido haciendo oídos sordos a los cada vez más fuertes reclamos de una reforma que haga más eficiente la gestión estatal y más transparente la forma de hacer política en la Argentina”. (“Preservar la paz social”, Editorial La Nación, viernes 25 de Enero de 2002)

De esta manera, el contenido de la movilización social era, en el discurso de *La Nación*, vaciado de otro contenido que no fuera la demanda de renovación política. Esta interpretación restrictiva tendía en consecuencia a desanclar la protesta social de las consecuencias de la crisis económica en términos de recesión, desempleo y exclusión de vastos sectores de la población; y, en esta medida, a desarticular su inscripción dentro del antagonismo planteado por el discurso de Duhalde entre el modelo de los '90 y la nueva alianza con los sectores productivos.

Ocurre que, como veremos, desde la perspectiva de *La Nación* las decisiones de política económica no correspondían estrictamente al campo de la política, sino a un ámbito de racionalidad técnica⁹, respecto del cual la política –como espacio del enfrentamiento y los antagonismos- no podía sino introducir un elemento de irracionalidad. Tal como había ocurrido a lo largo de 2.001, *La Nación* articulaba el

⁹ En la producción del carácter estrictamente racional, técnico y “ajustado a la realidad” de las medidas económicas defendidas por el consenso neoliberal cumplieron un papel decisivo las intervenciones de los economistas ortodoxos, cuyas posiciones se legitimaban en función del dominio técnico de la disciplina económica, y las cuales *La Nación* suscribía sin reservas.

espacio de la economía y la política a partir de una serie de distinciones en las cuales la valencia positiva correspondía siempre a la primera. Así, si la economía era el ámbito de la responsabilidad, la madurez, la realidad, la racionalidad y el bien común, a la política correspondía la irresponsabilidad, la inmadurez, las ilusiones y los falsos conceptos, la irracionalidad y, en fin, los intereses particulares y egoístas¹⁰.

Ahora bien: si las decisiones de política económica, en tanto referida a un ámbito de racionalidad, eran sustraídas al espacio de la política –esto es, no constituían materia de discusión-, no escapaba a *La Nación* que la implementación de las medidas dictadas por la ortodoxia económica requerían de la recomposición del poder político. Mucho más cuanto que a lo largo de 2001 la explicación de la crisis económica se había ido desplazando del terreno económico al terreno político, para ser adjudicada a la debilidad del gobierno de De la Rúa para implementar las decisiones que, señaladas por los economistas neoliberales, y requeridas por los organismos multilaterales de crédito, eran presentadas por el diario como la única vía de salida de la crisis de la Argentina.

En consecuencia, la impugnación a los actores del campo político que ensayaba el diario encontraba un límite en lo que para *La Nación* era la prioridad de la hora: la pacificación social y el reestablecimiento del orden, condiciones indispensables para el reestablecimiento de la autoridad política necesaria para la sanción de las medidas económicas demandadas por la ortodoxia liberal:

“El hombre a quien el Congreso ubique en la cúspide del poder político tendrá la ineludible responsabilidad de lograr, en lo inmediato, el pleno restablecimiento del orden público y de la paz social, hoy fuertemente alterados. El país no podrá hacer frente a los desafíos que una abultada agenda le plantea en el campo político, económico y social si previamente no consigue desterrar los choques y los desórdenes que desde el viernes último vienen empujándolo hacia el caos y la violencia”. (“El país necesita una autoridad”, Editorial de La Nación, Viernes 21 de diciembre de 2001)

“Los intolerables episodios de violencia vividos durante los últimos días e incluso ayer mismo en las calles de Buenos Aires le están transmitiendo al nuevo gobierno la clara señal de que su primera y más urgente prioridad será la de restablecer y garantizar el orden público y la paz social, sin los cuales se verá frustrado cualquier intento de resolver las apremiantes dificultades socioeconómicas que están acosando con implacable persistencia a la sociedad”. (“Esta debe ser la hora definitiva”, Editorial de La Nación, Miércoles 2 de enero de 2002).

¹⁰ En este sentido, ver por ejemplo: “Elijamos el camino de la madurez”, Editorial de *La Nación*, Lunes 18 de febrero de 2002.

En este sentido, los acontecimientos de diciembre de 2001 reconfiguraron los clivajes que ordenaban el campo político en la perspectiva de *La Nación*. Si respecto a los actores del sistema político devenidos en críticos del modelo neoliberal la impugnación era la misma que a lo largo de 2001 le había permitido al diario enfrentar la resistencia de esos actores a los ajustes del gasto público exigidos por la regla monetaria, a partir de diciembre esta impugnación era moderada por la aparición de un tercer actor: la protesta social, respecto de cuyo devenir imprevisible el gobierno de Duhalde podía ser –en la medida en que su curso de acción coincidiera con el propuesto por *La Nación*– una promesa de orden y de recomposición de la institucionalidad.

Es respecto a la necesidad de conjurar la protesta social y recomponer la autoridad política que se cerraba entonces una de las líneas argumentativas con la que el diario daba cuenta las movilizaciones sociales: estas expresaban el hartazgo de la ciudadanía hacia las prácticas corruptas de los elencos políticos; en esa medida, debían ser interpretadas estrictamente como portadoras de una demanda de reforma política; pero al mismo tiempo, sólo mediante la atención a esa demanda podía el gobierno recomponer la autoridad política necesaria para encarar la salida de la crisis de acuerdo a los incontestables dictados de la racionalidad económica¹¹:

“El primer paso hacia [un proyecto de país políticamente estable y económicamente sustentable] deberá ser el restablecimiento del orden público y de la paz social. (...)”

En gran parte de la opinión pública existe la percepción de que en nuestro Estado abundan los corruptos y los ignorantes, una creencia que a diario encuentra sólidos fundamentos. La reforma de ese Estado, elefantiásico e ineficiente, se ha convertido en un imperativo, que no implica únicamente una reducción de su burocracia, sino una mayor calidad. (...) Este proceso de transformación debe ir acompañado por una profunda reforma política (...).

Si la sociedad y sus dirigentes no adoptan esas reformas será cada vez más difícil la reconstrucción del poder político y, fundamentalmente, de la confianza necesaria para poner en marcha la economía”. (“Un proyecto de Nación”, Editorial de La Nación, domingo 13 de enero de 2.002)

3. La protesta social: ciudadanos y activistas

La articulación de la protesta social detrás de la impugnación de los actores del campo político, y a favor de una reforma política y del Estado compatible con la reducción del gasto público planteada por la ortodoxia neoliberal, no agotaba sin embargo las estrategias discursivas con la que *La Nación* intentaba dar cuenta del proceso de movilización social. En efecto, ese proceso de movilización social, vinculado en una de sus dimensiones con las consecuencias más negativas de las políticas económicas de los '90, comportaba un potencial de ruptura e impugnación respecto del paradigma de política económica defendido por *La Nación* que el diario no podía sino percibir como una amenaza a conjurar. Más inmediatamente, ese proceso de movilización social, cuyas derivaciones permanecían abiertas, jaqueaba lo que para *La Nación* era la prioridad de la hora: la recomposición del orden institucional y la autoridad política.

Es entonces respecto a ese potencial disruptivo de la movilización social que se completaba el dispositivo discursivo con el que *La Nación* buscó fijar el sentido de los acontecimientos de diciembre. Respecto a la protesta social, ese dispositivo discursivo se articuló en torno a una distinción básica: la que enfrentaba a la *ciudadanía independiente*, espontáneamente movilizada en rechazo a la clase política, con *los activistas e infiltrados*, promotores y protagonistas de los hechos de violencia, los saqueos, y los ataques a la propiedad privada. Entre una también extensa lista de ejemplos:

“El mapa de las protestas callejeras se ha complicado y a veces se hace difícil separar el trigo de la cizaña. Pero la sociedad no se engaña: conoce bien a unos y otros y sabe distinguir entre un pacífico cacerolazo de ciudadanos independientes y la intervención aviesa y destructiva de quienes sólo procuran desatar la violencia, pues de ese modo llevan agua a sus molinos ideológicos”. (“Reconstruir el tejido social”, Editorial de *La Nación*, domingo 30 de Diciembre de 2001)

“No sería osado inferir que el lenguaje de las cacerolas ha sido la secuela poco menos que inmediata de la desatención con que el grueso de la dirigencia política asumió la clara y fundamentada señal emitida por la ciudadanía independiente en las elecciones del 14 de octubre último. Tampoco lo será si se interpreta que tras esos martilleantes sonidos bullía la sana pretensión de hacer públicos el hartazgo generado por las corruptelas, los ingentes gastos y la tendencia a perpetuarse de la clase política o el disgusto por las restricciones bancarias que han violado el legítimo derecho de propiedad de millones de ahorristas.

¹¹ En el mismo sentido, ver: “La representación política, en crisis”, Editorial de *La Nación*, domingo 10 de marzo de 2002.

Si bien se trató de exteriorizar espontáneamente ciertas demandas de incuestionable validez y cuyos ecos no deberían caer en saco roto, sería prudente que la sociedad en su conjunto encarase una sincera y profunda meditación acerca de su significado y, sobre todo, su conveniencia. (...) Tan ruidosas demostraciones son susceptibles de dar pie involuntariamente -tal como ocurrió- a gravísimas alteraciones del orden público. (...) Los resultados (...) son bien conocidos: la oleada de disturbios, que tuvo por protagonistas a minoritarios y radicalizados grupos de activistas -ajenos, sin dudas, al sentir y a las intenciones de la mayoría-, con una impresionante cantidad de víctimas y de daños, primero, y la renuncia de Fernando de la Rúa, poco después”. (“El apego por los cacerolazos”, Editorial de *La Nación*, Lunes 27 de enero de 2.002)

Lo que *La Nación* ponía en juego con esta distinción no era sólo la impugnación a las modalidades más violentas de protesta, o la intención de estigmatizar a algunos de sus protagonistas¹². Más importante, en torno a esta distinción se definían propuestas de acción política: si el reclamo de la *ciudadanía independiente* podía ser recuperado por el diario en tanto demanda de reforma política –en una operación que le permitía además a *La Nación* convertirse en portavoz de la opinión pública frente a la corporación política-; persistía sin embargo en esa protesta un resto improcesable en el dispositivo discursivo del diario –podemos hipotetizar: aquel que introducía el elemento conspicuamente ausente de la reflexión de *La Nación*, la impugnación violenta del modelo social y económico dominante en la década del '90-, que, en tanto tal, solo podía ser enfrentado por la ultima ratio de ese orden cuya preservación era la primera prioridad del diario: la represión por parte de las fuerzas policiales.

“Un capítulo aparte merecen, por supuesto, los instigadores y agitadores profesionales que, respondiendo a oscuros intereses ideológicos, aprovechan siempre las olas de malestar social para introducir el virus de la violencia y generar el caos y hasta la anarquía. (...)”

Hay algo que está fuera de discusión y es que contra esos provocadores insidiosos y oportunistas no cabe otro remedio que una acción enérgica de las fuerzas policiales y de seguridad tendiente a restaurar el orden público vulnerado (...) Respecto de los vándalos y los violentos, la respuesta no puede ser otra que el ejercicio firme y sin claudicaciones de la autoridad y el mantenimiento a rajatabla del orden público”. (“Reconstruir el tejido social”, Editorial de *La Nación*, domingo 30 de Diciembre de 2001)

¹² Cuestión que, bajo el tópico de “la criminalización de la protesta social” ha sido tematizado por diversos análisis.

Consistentemente con esta línea argumentativa, que encontraba en las fuerzas de seguridad la frontera última contra la amenaza de desintegración que el diario percibía inscripta en la movilización social, a lo largo de estos meses *La Nación* se ocupó de convocar a la ciudadanía a prestar “el acompañamiento moral”¹³ que requerían las fuerzas de seguridad para cumplir su tarea, advirtiendo que “sin ellos no habrá democracia sino anarquía, no habrá paz social sino violencia incontrolable”¹⁴.

Como hemos visto, *La Nación* apostó inicialmente a articular la protesta social detrás de sus posiciones, en términos de una demanda restringida de renovación política. Sin embargo, a medida que las movilizaciones pasaron a convertirse en un hecho permanente del escenario político, el diario –quizás advertido de la dificultad y los riesgos de esa estrategia- fue avanzando en una impugnación global, que reivindicaba los marcos institucionales como único medio legítimo, y compatible con el ordenamiento democrático, de expresión de la voluntad ciudadana:

“Cuando la protesta y el cacerolazo se convierten en procedimientos rutinarios para derrocar a los gobernantes y exigir que sean reemplazados por otros lo que se está tratando de hacer, obviamente, es provocar una derogación de facto del sistema de designación de autoridades establecido por la Constitución. A partir de allí, lo único que puede esperarle a una sociedad es la disolución y el caos. (...)”

Es indispensable que los argentinos nos serenemos y comprendamos que un país no puede funcionar en un permanente estado de deliberación popular. (...) Una nación no puede vivir en una suerte de aventura épica permanente. Una nación necesita un sistema institucional previsible y acatado por todos. Y necesita algo más: la serenidad suficiente para que la razón prevalezca, en toda circunstancia, sobre las emociones simples y las pasiones desbordadas”. (“Protestas y cacerolazos”, Editorial de La Nación, Domingo 17 de febrero de 2002).

4- El vaciamiento del campo político

Hemos señalado al comienzo de este trabajo que la legitimación de las reformas neoliberales durante el gobierno de Menem ha sido descripta como una operación de vaciamiento del campo político (Canelo, 2002), que comportó, en el discurso del

¹³ “La policía y los hechos de violencia”, Editorial de *La Nación*, domingo 23 de diciembre de 2002.

¹⁴ “Policía y democracia”, Editorial de *La Nación*, Jueves 21 de marzo de 2002.. Ver en el mismo sentido “La detención del comisario Santos”, Editorial de La Nación, martes 12 de febrero de 2002.

gobierno justicialista, el borramiento de los clivajes sociales que habían organizado históricamente el campo político en la Argentina, y la presentación de las políticas neoliberales como una política universalista, que coincidía con el interés del conjunto de la Nación.

Frente a la crisis de diciembre de 2.001, *La Nación* desarrolló una estrategia similar, que apuntaba, por un lado, a desarticular el antagonismo planteado por el discurso del presidente Duhalde; y, por otro lado, a defender la continuidad de las políticas neoliberales, identificándolas, en tanto única salida posible a la crisis, con el interés del conjunto de la Nación.

Según hemos visto, el diario *La Nación* adjudicaba a las conductas de los actores del sistema político la responsabilidad por la debacle económica. En este punto, esos actores eran considerados como un obstáculo para la implementación de las medidas ortodoxas defendidas por el diario. Consecuentemente, *La Nación* buscó articular la movilización social en contra de las posiciones de los actores del sistema político, y a favor sus preferencias de política –así en la demanda reforma política y reducción del gasto público. Pero, por otra parte, la emergencia de la movilización social implicaba un potencial de impugnación de consecuencias imprevisibles, que amenazaba aún más radicalmente la continuidad de las políticas neoliberales defendidas por el diario. En este punto, la impugnación de los actores del campo político retrocedía frente a la necesidad de recomponer el orden social y restituir la autoridad política, condición previa e imprescindible para la implementación de esas políticas.

Es entonces en esta demanda de orden que el discurso de *La Nación* podía reencontrarse con los actores del sistema político –actores del campo político para los cuales la recomposición del orden y la desactivación de la protesta social eran condiciones necesarias para asegurar su propia reproducción política.

La exigencia de orden y pacificación se formulaba en el discurso del diario en términos de un llamado a la unidad nacional:

“Hasta las peores crisis políticas, económicas y sociales deben ser vistas como una oportunidad. En el caso de la golpeada Argentina de hoy, no sólo se trata de una ocasión para aprender de los errores, sino para iniciar un nuevo ciclo -fundacional, si se quiere- que contemple un proyecto de país políticamente estable y económicamente sustentable (...). Para tener probabilidades de éxito, este nuevo ciclo deberá cimentarse en un esfuerzo mancomunado de toda la sociedad, sin exclusiones, en el que no haya espacio para antagonismos estériles que signaron penosos capítulos de nuestra historia y que, en las últimas semanas, se manifestaron en forma trágica. El

primer paso hacia ese objetivo deberá ser el restablecimiento del orden público y de la paz social”. (“Un proyecto de Nación”, Editorial de *La Nación*, Domingo 13 de Enero de 2002)

La convocatoria al conjunto de la Nación formulada por el diario se hacía eco, y respondía, al discurso del presidente Duhalde. Como vimos, en su discurso de asunción Duhalde había formulado una apelación a la defensa del interés nacional. Ahora bien, esta apelación al interés de la Nación en el discurso de Duhalde se definía en función de un clivaje que venía a reinstalar un antagonismo fundamental en el campo político: aquel que enfrentaba a los sectores productivos con el sector financiero, presunto artífice y beneficiario del modelo económico neoliberal de los '90. En el discurso de Duhalde, el interés nacional se identificaba estrictamente con uno de los polos de este antagonismo.

Lejos de hacer suya la interpelación del presidente Duhalde, el llamado a la unidad nacional de *La Nación* venía a rechazar esa división antagónica del campo político, descartándola como una falsa antinomia:

“No es prudente, pues, correr el riesgo de generar falsas antinomias que poco o nada habrán sido contribuir a resolver los gravísimos apremios que mantienen a los argentinos sumidos en la incertidumbre y la desesperanza. (...) Restablecer la unión nacional y consolidarla de manera tal que resista los fortísimos embates que todavía la aguardan es una prioridad máxima que no admitiría en modo alguno argumentaciones en sentido contrario. (...) Esa labor, tiene que ser llevada adelante con la firme convicción de hacer todo cuanto fuere necesario para contener los antagonismos de cualquier clase -ideológicos, políticos, sociales, etcétera- que han sido responsables, en medida considerable, de la situación límite que está soportando el país”. (“Basta de antagonismos”, Editorial de *La Nación*, Martes 8 de Enero de 2002)

El rechazo al antagonismo planteado por el discurso de Duhalde se extendía a una impugnación del espacio de la política como tal, entendida como un espacio de afirmación de los intereses particulares, y en ese medida, contrarios al interés común:

“Resulta imprescindible que se sustraiga un cierto número de cuestiones sustantivas para la sociedad de la pugna encarnizada que ha envuelto en los últimos tiempos a los dirigentes políticos, en la cual todo se pone en duda y donde ningún acuerdo parece perdurar lo suficiente. (...)”

Los argentinos vivimos una honda crisis, inédita por su extensión, y por la multiplicidad de sus derivaciones económicas, financieras, sociales y políticas. La salida no se logrará rápidamente.

sin duda, y tenderá a demorarse cada vez más en la medida que los distintos sectores sociales y políticos no depongan sus egoísmos en pos del conjunto de la Nación. (“Hacia un acuerdo para la sensatez”, Editorial de *La Nación*, Miércoles 16 de Enero de 2002)

Ahora bien: ¿en qué ámbito, si no el de la política, se definía para el diario al interés de la Nación? Descalificado el espacio de la política, el interés de la Nación, y la superación de la crisis, era identificado con el universalismo garantizado por una racionalidad económica realista y madura:

“La situación es sumamente grave. No deben demorarse medidas de fondo que apunten a recuperar la confianza a través del máximo respeto posible por la ley y el derecho de propiedad. Es necesario superar los planteos ideológicos anacrónicos y las apelaciones demagógicas e incorporar racionalidad al proceso económico, en beneficio del bien común”. (“Todavía sin plan económico”, Editorial de *La Nación*, Domingo 3 de febrero de 2002)

Como resulta claro de lo dicho hasta aquí, esa racionalidad económica universalista coincidía punto por punto con las medidas en clave neoliberal planteadas por los economistas ortodoxos y exigidas por los organismos internacionales de crédito:

“Ha llegado el momento para poner en marcha un proyecto económico consistente y de largo alcance (...) abandonando estériles antagonismos. (...) El país requiere previsibilidad para recuperar la confianza del mundo y eso no se logrará sin un presupuesto equilibrado que se procure cumplir a rajatabla, sin una política tributaria simple y duradera y sin una nueva ley que regule la relación entre la Nación y las provincias, que contemple un compromiso conjunto en la reducción del gasto público improductivo y en la lucha contra la evasión impositiva”. (“Un proyecto de Nación”, Editorial de *La Nación*, Domingo 13 de Enero de 2002)

“Revertir los sucesivos fracasos de todos los últimos planes económicos no es una tarea sencilla. (...) Esta tarea requerirá la confección de un presupuesto serio y equilibrado, el compromiso de una política monetaria sana y la ratificación de la apertura económica para no quedar en el aislamiento. (...) Es fundamental que el gobierno nacional entienda esto, pero mucho más importante es que la dirigencia política lo acompañe. (“El diálogo con Estados Unidos”, Editorial de *La Nación*, Domingo 20 de Enero de 2002)

De esta manera, a la hora de proponer salidas a la crisis, el diario replicaba una estrategia de vaciamiento del campo político. Rechazando la identificación del interés nacional con uno de los dos polos de un espacio social y político definido por proyectos antagónicos, el diario sustraía la solución de la crisis al campo político –impugnado

como el ámbito de expresión de intereses particulares y egoístas- para colocarlo en el terreno de una racionalidad económica que, en su universalismo técnicamente asegurado, coincidía inmediatamente con el interés de la Nación.

5- Las palabras y las cosas

Hemos planteado este trabajo a partir de la hipótesis de que la crisis de diciembre de 2001, en la medida en que comportó un proceso de impugnación creciente a las políticas neoliberales dominantes durante las décadas de los '90, inauguró, en la escena pública de la comunicación política, un proceso de intensificación de la lucha simbólica, en el cuál los defensores de ese paradigma de política desarrollaron una estrategia de rearticulación defensiva del consenso neoliberal. Hemos analizado hasta aquí cuáles fueron las estrategias discursivas puestas en circulación por *La Nación*, entendido como uno de los articuladores privilegiados de ese consenso en el campo político periodístico. Para finalizar este análisis, nos interesa señalar hasta qué punto ese proceso de lucha simbólica fue plena y explícitamente asumido por *La Nación*.

En su aspecto más básico, un proceso de lucha simbólica deviene una lucha por la definición de las palabras –entendiendo que el lenguaje no se encuentra en una relación transparente con su referente, sino que en él se instituye una determinada relación con el mundo social. Y, efectivamente, en los meses que siguieron a diciembre de 2001, *La Nación* se sintió convocada a un trabajo semiótico-político, destinado a conjurar aquellos deslizamientos de los significantes al que la crisis había dado lugar. De una serie de ejemplos, queremos señalar dos: en primer lugar, en la impugnación de la interpretación que adjudicaba la crisis a las políticas económicas neoliberales, *La Nación* terminó rechazando el significante que en el discurso político aludía a dichas políticas bajo el nombre sintético de “el modelo”. En efecto, ¿cómo dar crédito a esta interpretación si aquello que se esgrimía como clave causal era sólo un “efecto de real” sostenido en un pura materia significativa a la cual no correspondía ningún contenido propio? De acuerdo al editorial de marzo de 2002, el “modelo” era “*un invento retórico*”¹⁵. Se trataba apenas de un ejemplo de aquellas palabras “*que se instalan con fuerza en la jerga política, aunque su utilización resulte a todas luces irracional*”¹⁶.

¹⁵ Ver “El modelo, un invento retórico”, Editorial de *La Nación*, Domingo 10 de marzo de 2002.

¹⁶ Ídem.

Declarando vacío el significante, *La Nación* derogaba toda una interpretación de la crisis:

“Se trata de una manera equivocada de examinar la realidad. No existe el proclamado modelo "neoliberal".

para llamar la atención sobre lo que consideraba un grave defecto de la cultura política argentina: la tendencia a rendirse a esos fetiches retóricos que no hacían sino ofuscar las mentes e impedir una aprehensión racional¹⁷ del proceso argentino:

“Demonizar a un supuesto modelo socioeconómico como principal responsable de nuestros descalabros e infortunios es arbitrario y contrario a toda lógica. Es necesario que los argentinos dejemos de lado esos artificios retóricos y conceptuales -que sólo sirven para sembrar confusión- y seamos realistas, responsables y libres. (...) Los errores más graves son los que se cometen desde la distorsión del lenguaje, desde el uso de palabras inapropiadas y desde el prejuicio ideológico o conceptual.” (“El modelo, un invento retórico”, Editorial de *La Nación*, Domingo 10 de marzo de 2002).

El segundo ejemplo es una columna del editorialista político Mariano Grondona¹⁸, comprometida en el mismo trabajo de depuración del lenguaje político. En este caso, más que de significantes vacuos, se trataba de una adscripción desafortunada de las palabras a las cosas. Mientras que algunos pretendían que en Argentina había hecho crisis una modalidad de acumulación capitalista, Grondona nos advertía que lo que había habido hasta diciembre de 2001 en la Argentina no fue capitalismo:

“¿Qué es el capitalismo? Durante la larga presidencia de Carlos Menem se difundió la idea de que él era el autor de un modelo económico capitalista al que terminó por llamársele “el modelo” y al que se presentó como el máximo culpable de nuestros males. (...) El modelo de Menem, ¿era capitalista? Al principio, sí. (...) Pero el Menem terminal se había alejado decisivamente de ese modelo”. (“¿Por que estamos tan mal? Porque pensamos mal”, columna de Mariano Grondona, *La Nación*, Domingo 31 de marzo de 2002)

La tarea a la que se entregaba Grondona es sin embargo similar: purificar las palabras, devolverlas a su significado propio, para evitar que ofuscaran las mentes. En este sentido, la posición del editorialista asumía explícitamente la dimensión de lucha

¹⁷ Hemos visto ya que para *La Nación* el ámbito de la racionalidad coincidía con los dictados de la ortodoxia económica.

¹⁸ “¿Por que estamos tan mal? Porque pensamos mal”, columna de Mariano Grondona, *La Nación*, Domingo 31 de marzo de 2002.

simbólica de su enunciación: era precisamente porque las palabras eran eficaces, que los errores de nominación se encontraban en el origen de la crisis argentina:

“La autocrítica de los argentinos podría transitar (...) otro sendero paralelo, indagando no sólo lo que somos, nuestro carácter nacional, sino lo que pensamos, nuestro ideario nacional. Seamos peores o mejores de carácter, quizá lo que nos pasa es que andamos perdidos, confundidos, intoxicados por ideas erróneas. (...) Si las ideas que triunfan entre nosotros son que la democracia es la partidocracia o las puebladas y que el modelo capitalista es el del Menem terminal y no el del Menem inicial, si aún creemos que el dirigismo encierra alguna promesa de desarrollo y de bienestar, **mientras pensemos como pensamos estaremos como estamos**”. (“¿Por que estamos tan mal? Porque pensamos mal”, columna de Mariano Grondona, *La Nación*, Domingo 31 de marzo de 2002)

Ahora bien: ¿qué es lo que estaba en juego en esta disputa por las palabras? Sencillamente, la impugnación de la adscripción de la crisis argentina al paradigma de política económica, o, más ampliamente, al modelo de sociedad propugnado por el diario:

“Lo que fracasó en la Argentina no fue por ello el modelo capitalista, sino su desvío” (“¿Por que estamos tan mal? Porque pensamos mal”, columna de Mariano Grondona, *La Nación*, Domingo 31 de marzo de 2002)

Esto, porque si efectivamente la crisis argentina no era la crisis de un modelo económico —o bien porque tal modelo era una mera distorsión del lenguaje, o bien porque el referente al que ese significante aludía no presentaba ninguno de los rasgos que hubieran justificado esa asignación— las políticas neoliberales podían ser restituidas como el horizonte todavía irrealizado y siempre diferido en el que los problemas de la Argentina encontrarían solución.

6- Conclusiones

El objetivo de esta ponencia fue analizar las posiciones del diario *La Nación* en los meses posteriores a la crisis política y económica de la Argentina de diciembre de 2001. Frente al potencial de impugnación de la políticas neoliberales implicado por la ruptura del régimen de Convertibilidad, el diario desarrolló una estrategia defensiva, que

comportó la apropiación, la rearticulación y el desplazamiento de los esquemas de sentido que organizaban la esfera de la comunicación política en ese coyuntura. Así, respecto a los actores del campo político, devenidos en críticos de las políticas neoliberales, el diario desarrolló una estrategia de impugnación, que desplazaba en su contra la responsabilidad de la crisis, y articulaba la protesta social como una demanda restringida de reducción del gasto público y reforma política.

El clivaje entre los actores del campo político y los articuladores del consenso neoliberal, que había ordenado la escena de la comunicación política a lo largo de 2001, se vio complejizado por la emergencia de la protesta social. El potencial de impugnación de las políticas neoliberales que ese proceso de movilización comportaba fue enfrentado por *La Nación* a partir de distinción entre ciudadanos y activistas. Esta distinción no sólo expresaba la voluntad de rechazar la legitimidad de determinadas expresiones de protesta, sino que proponía determinadas modalidades de respuesta desde el poder político. Si la protesta espontánea de los sectores medios era procesable por el dispositivo discursivo del diario en términos de reforma política, los activistas – que es el lugar que en la economía discursiva de *La Nación* ocupa la cuestión social ausente- exigían aprestar la capacidad represiva del Estado.

Es entonces en la demanda de orden donde el discurso de *La Nación* podía reencontrarse con el sistema político. A medida que avanzaba la crisis, y se multiplicaban las expresiones de protesta, el problema del orden y la voluntad de desactivación de los antagonismos fueron ganando un lugar central. Esa preocupación se expresó en el rechazo a la reactivación de los antagonismos en el campo político y social propuesto por el discurso del presidente Eduardo Duhalde; y en la voluntad de resolver los antagonismos en una unidad nacional cuyo contenido universalista, e idéntico al bien común, coincidía con el de la racionalidad económica articulada en términos del paradigma neoliberal. Los desafíos que la crisis implicaba supusieron también la agudización de la lucha simbólica, proceso que fue hecho explícito en la voluntad del diario de reflexionar sobre el sentido de las palabras. En último término, la demostración de que el modelo no era tal; y que el capitalismo, lejos de ser el responsable de la crisis, estaba aún irrealizado en la Argentina, permitía restituir el paradigma neoliberal como horizonte utópico y todavía inconcluso para la Argentina.

Bibliografía citada:

- Canelo, Paula: "La construcción de lo posible: identidades y política durante el menemismo", Documento de Trabajo FLACSO, Buenos Aires, FLACSO-Argentina, 2002.
- Fuentes: Diarios *Clarín* y *La Nación*, noviembre 2001-abril 2002.